

Una declaración importante

A su regreso de Washington, el Presidente del Banco Central formuló una declaración de primera importancia. Intercalando el tema entre otros, y como al pasar, el Cr. José María Puppo dejó entrever una perspectiva de vastísimos alcances, tanto políticos como económicos, cuando dijo a la prensa: "Vamos a tener que procurar políticas de tipo permanente, que tengan larga duración, más allá de la vigencia de un período de gobierno. Eso implica para nosotros la obligación de buscar un acuerdo nacional en materia económica."

Pese a la relativa intemporalidad de la fraseología empleada, no cabe duda de que el Cr. Puppo se estaba refiriendo al momento presente, y más concretamente a un acuerdo sobre política económica entre el gobierno militar y los dirigentes partidarios. Es una idea nada sorprendente en sí misma, pero al mismo tiempo original y osada en el contexto histórico en que se la enunció. Su puesta en práctica podría transformar el panorama nacional, aclarando un tanto los tonos plúmbeos, más aún lóbregos, que hoy lo dominan, y sobre todo dotándolo de cierto dinamismo; sustituyendo la imagen central, que hoy es una carreta que se hunde en una ciénaga, por la de un vehículo que trepa, por más que trabajosamente, una empinada cuesta, gracias al esfuerzo de muchos.

Permitásenos pasar revista brevemente a las ventajas que surgirían generosamente, en todas direcciones.

Al gobierno, la mera negociación de un acuerdo le obligaría a suplir una omisión que, según todo lo indica, a falta de una excitación externa de magnitud apreciable, encuentra sumamente difícil de llenar: exponer su política económica, si es que la tiene, o sí, como nosotros sospechamos, carece de ella más allá del programa preparado por el FMI a fines del año pasado, estructurala.

Se necesita un plan. Pensamos que sería ocioso insistir mucho en cuanto al sentido en que usamos en **Busqueda** la palabra plan, que no se refiere a un plan para la economía, sino a un plan para el gobierno. Implica que la política salarial y la política impositiva, y la política de inversiones, y la política comercial, pudieran percibirse como un conjunto articulado, en lugar de como reacciones espasmódicas contra la presión de los acontecimientos. Implica que se pudiera comprender qué pasa con el gobierno de la moneda, y qué grado de coordinación existe entre el BCU y el BROU, un enigma que nos desvela, y que las autoridades no deberían seguir sin develar. Y otras cosas por el estilo.

Para el debate político, tan difícil, que deberá preceder

el próximo acto electoral, un acuerdo como el que nos ocupa reportaría la señalada ventaja de excluir de su ámbito el área de la coyuntura, zona abrasiva si las hay, sobre la cual el enfrentamiento de las ideas sería propenso a generar mucho más calor que la luz. Quedarían, por cierto, todas las cuestiones estructurales para debatir, que de hecho son las apropiadas para definir los matices de la opinión política.

Para la trascendental cuestión del retorno de la república a su plenitud constitucional, el acuerdo tendría la suprema virtud de hacer que las partes del diálogo sobre temas tan encumbrados como la libertad y la seguridad tuviesen que sentarse juntos en torno a cuestiones cotidianas, como la de hacer que el presupuesto cierre, mucho menos susceptibles de engendrar discrepancias filosóficas, y, en cambio, con una grande y bienvenida potencialidad de propiciar un sentido de cooperación mutua y de propósito común.

A los hombres y mujeres comunes podría reportarles eso que hace tanto tiempo que les falta: confianza en que hay alguien en el puente de mando que conoce la ruta por donde debemos navegar, y que los mensajes que en lo sucesivo se emitan desde el puente de mando van a informarles verazmente sobre la posición y el rumbo de la nave; en que no serán sorprendidos y engañados una vez más. Con lo cual la estrategia defensiva que está caracterizando el comportamiento de los agentes económicos sería reemplazada por una actitud basada en los propósitos normales, y a las actividades de consumo e inversión que van con ellos. Y, mal que bien, la economía uruguaya zafaría de su atroz atascamiento actual, y se pondría en movimiento.

Lo dicho presupone, como es natural, que un acuerdo sería factible. La acidez de las críticas contra el gobierno que han dejado oír los partidos, y, más aún, su universalidad, su carácter omnicomprensivo, parecerían oponerse a esta posibilidad. Nosotros, sin embargo, no nos dejaríamos disuadir por semejante visión, que creemos se detiene en la superficie de las cosas. Y para sostenerlo nos basamos en dos órdenes de consideraciones.

En primer lugar, ya que no cabe duda que serían las Fuerzas Armadas quienes deberían dar el primer paso, el cual conllevaría las medidas obvias para posibilitar la clase de colaboración a que estamos aludiendo, nuestra percepción de la hipotética situación que se plantearía nos muestra a los políticos enfrentados a las disyuntiva

de estar o no estar a la altura de las circunstancias. ¿Y quién podría imaginar que optaran por la pequeñez, y contra la grandeza?

En segundo lugar, la política de coyuntura actual debe operar dentro de restricciones muy estrechas, que dejan muy poco margen para orientaciones divergentes. En el Uruguay las condiciones más crueles son una deuda pública externa de 2.800 millones de dólares, un presupuesto fuertemente desbalanceado, y nuestros dos grandes vecinos, Brasil y Argentina, en situaciones de crisis aguda, desempeñando apenas frente a nuestra economía papeles desestabilizadores, a través de la fuerte subvaluación de sus monedas en los mercados paralelos, a la vez fruto de los tremendos desequilibrios externos que ambos experimentan.

Nadie puede dudar de buena fe que una política de severísima austeridad está indicada para nuestro país en el corto plazo. Pero, ¿lo reconocerán nuestros partidos? ¿No operarán frenos ideológicos en el sentido de impedirlo? También en este contexto encontramos una fuente de optimismo, merced a una mirada al panorama internacional pertinente. Por tal nos referimos a la consideración de las políticas que la social democracia está llevando a cabo en los países europeos en que gobierna.

Lo más espectacular es la demostración de Bettino Craxi en el sentido de que la social democracia italiana podía superar de lejos a la democracia cristiana de aquel país en medidas de austeridad, al punto de reducir marcadamente ciertos beneficios de la seguridad social; Papandreu, el más fogoso y aparatoso de los socialistas europeos, acaba de anunciar que los salarios subirán en adelante menos que la inflación; Felipe González se propone reducir los ajustes de remuneraciones a la mitad de la tasa de suba de los precios; Mario Soares, ha hecho subir las tasas de interés hasta un 10 % real sin precedentes en Portugal; Mitterrand, después de su breve festival reflacionista, está haciendo que los franceses se aprieten el cinturón como nunca; y en Suecia, *mirabile dictu*, Olof Palme se ha reencontrado con el gobierno enviando al Parlamento un presupuesto que reduce en 4 % los salarios reales del sector público.

Nuestros partidos son en realidad, como la mayor parte de los latinoamericanos variantes de la social democracia; y si la austeridad es abrazada por la de allende el Atlántico, no hay razones para presumir que será rechazada por la de aquende.